

EL DILEMA SOCIAL DEL CAMPO

David Ibarra
14 de marzo de 2003

En los últimos meses se han roto los diques del descontento campesino, larvados a lo largo de años de angostamiento de las esperanzas e incumplimiento de los procesos gubernamentales de desarrollo y de avance social.

La inserción plena de la agricultura al mercado, a la globalización, había sido planteada como vía de modernización y crecimiento, como solución a los añejos problemas de la marginación y la pobreza. Al propio tiempo se le visualizó como salida al paternalismo autoritario del Estado que entorpecía la iniciativa y las capacidades de los productores. La liberación de fronteras serviría, además, se dijo, para que los agricultores adquiriesen a precios internacionales reducidos los insumos, bienes de capital o tecnologías y de acicate al cambio de sus hábitos productivos.

Las realidades del cambio de modelo agrícola, han confirmado algunos de los beneficios esperados, pero también han acentuado problemas y costos no previstos de una transición que se quiso instrumentar de manera rápida, con una batería incompleta de políticas que la hicieran social y políticamente llevadera.

Entre las omisiones de la estrategia del cambio, estuvo la de pasar por alto las muchas agriculturas que se dan en el país al querer englobarlas en soluciones únicas. Una es la explotación de las tierras con riego y técnicas depuradas y alta densidad de capital, otra la de los cultivos de subsistencia en minifundios de temporal. La globalización lleva consigo la reorganización espacial de la producción impulsada por una competencia transfronteriza que afecta de modo muy distinto a esas diversas agriculturas nacionales.

Otro problema que no se anticipó, fue la ruptura evolutiva de medio siglo en que los mercados de las ciudades absorbían los excedentes de población del campo. La reducción en las tasas de crecimiento del producto de los últimos veinte años, se ha unido al uso de tecnologías ahorradoras de mano de obra y a la destrucción de muchos de los eslabonamientos interindustriales para reducir significativamente los multiplicadores nacionales de empleo.

En tales circunstancias, no se evaluaron con rigor las consecuencias sociales que habrían de expresarse en el período de transición. El dualismo, la heterogeneidad estructural en lo económico y social, lejos de atenuarse se ha intensificado hasta dar lugar a protestas abiertas de la población afectada.

Por consiguiente, más que la supresión de fronteras, la retirada del proteccionismo estatal en sus múltiples dimensiones, ofrece un mosaico de resultados que está lejos de validar los beneficios publicitados de la estrategia neoliberal y que ponen de relieve la insuficiencia de las políticas propias al propósito de conducir con menores costos, la inserción de nuestra agricultura a los mercados universales.

Sin un diagnóstico medianamente certero, es fácil errar políticas y soluciones, es difícil hacer mella en las dificultades reales que nos aquejan. Considérese un caso: algunos inculpan al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la mayoría de los males de los campesinos del país. Se trata de una verdad a medias; el culpable real es la pasividad de las políticas propias al propósito de buscar deliberadamente la adaptación de los productores al libre cambio, como lo hacen puntualmente las naciones industrializadas.

Es posible que la negociación del apartado agrícola de ese Tratado haya sido deficientemente llevada. También podría extrañar que se usen tímidamente las cláusulas

de salvaguarda del mismo. Pero es del todo reprobable que el desmantelamiento de las instituciones del proteccionismo se haya llevado a cabo sin la construcción a tiempo de las instituciones de reemplazo del mercado, que no se haya instrumentado una estrategia de reconversión productiva en diez o más años de transición al cambio y que se haya permitido el desplome del gasto, el crédito y la inversión públicas dirigidos a sostener el desarrollo del sector agropecuario y resguardarlo en un mundo donde no priva el libre comercio, sino el intervencionismo estatal sin tapujos de las naciones industrializadas.

El producto agropecuario creció poco a razón del 1.6% anual entre 1990 y 2001, a una velocidad 50% inferior a la del conjunto de la economía (3.1%) por su parte, el empleo en ese último sector quedó prácticamente estancado. Por tanto, el crecimiento de la población activa rural (3%), tuvo que encontrar salida en la emigración a la par de empobrecerse.

Aquí nace uno de los problemas centrales del campo mexicano. Durante el proceso de desarrollo es natural que la agricultura pierda ponderación en la generación del valor agregado y también que la emigración campo-ciudad transfiera mano de obra de ocupaciones de bajo rendimiento y bajas remuneraciones a otras de las características contrarias, con mejoría de los estándares de vida de todos. La condición central de vigencia de ese círculo virtuoso reside en que los centros urbanos ejerzan demanda laboral creciente que vaya aliviando las presiones demográficas del campo.

Las circunstancias descritas se venían dando en México desde los años treinta. En 1960, la población rural era casi un 50% de la nacional y el sector agropecuario ocupaba el 55% de la población activa. Al comenzar el siglo XXI, la población rural representa menos de un cuarto del total nacional, absorbe alrededor de un quinto de la ocupación.

El círculo virtuoso mencionado se rompió a partir de la década de los ochenta, cuando se debilita sensiblemente la demanda de trabajo en las ciudades, sobre todo en las manufacturas, la construcción y hasta en los servicios comerciales de hoteles y restaurantes. Las ocupaciones en las manufacturas con tasa de expansión anual del 2.8% entre 1950-1980, casi se estancan en la década de los noventas; la de la construcción baja del 7.8% al 1.5% y la del comercio, hoteles y restaurantes se encoge a la mitad. Sólo el empleo en las empresas maquiladoras sigue una espiral ascendente que se invierte a partir del receso norteamericano actual.

Todo lo anterior crea intensas tensiones sociales en el campo al cerrarse los desfuegos demográficos más importantes al interior de la economía nacional. Al propio tiempo, la distribución del ingreso refleja disparidades enormes y crecientes al resultar pocos los ganadores muchos los perdedores del cambio.

En 1996, los hogares mexicanos por debajo de la línea de la pobreza llegaban al 52% y los ubicados en situación de indigencia al 21%. Las cifras correspondientes al sector rural eran mayores, 62% y 32%. Entre 1996 y 2000, mejoran ligeramente los números de la población pobre del país (41%), pero sigue muy altos los de los hogares rurales pobres (55%) y de los indigentes (28.5%).

A partir de entonces, la situación continúa deteriorándose. En 1989, el 40% de los hogares más pobres recibían el 18% del ingreso rural, mientras el 10% más rico captaba el 27%. En el año 2000, la primera cifra baja al 15% y la segunda sube al 38%. Visto el mismo problema de otra manera: en 1989, el 34% de la población rural percibió apenas la mitad del ingreso medio también rural, para 2000 ese dato se eleva al 46%.

En suma, el tejido social del campo presenta rasgaduras que ya no es sensato dejar se ahondan sin poner algún remedio, sin asumir colectivamente algún costo.

